

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO DE ARIZONA

1 FÁTIMA PADILLA, por y a través de su madre;)
2 MARÍA GUEVARA; ROSA LÓPEZ;)
MARCELINO GRIJALVA-LÓPEZ;)))
3 GUILLERMO LUJÁN; DORA MORALES; y JOSÉ)))
DAVID)
4 CASSANOVA, en nombre y representación de sí)
5 mismos y una clase de personas en una situación)
similar,)
6 los Demandantes,)
7 contra)
8 ANTHONY RODGERS, Director del Arizona Health)
Care Cost Containment System, y TOMMY)
9 THOMPSON, Secretario del Departamento de Salud)
y Servicios Sociales de los Estados Unidos, ambos a)
10 título oficial,)

No. CIV 02 176 TUC FRZ

DECRETO DE CONSENTIMIENTO

11 los Demandados.

12
13 Los Demandantes entablaron esta acción judicial en su propio nombre y representación, así como
14 también, en nombre y representación de una clase de personas que se encuentran en una situación similar y que
15 padecen una enfermedad renal terminal. En la segunda demanda enmendada, los Demandantes alegaron que el
16 Demandado Rodgers cambió la definición de servicios médicos de emergencia, según programa del *Arizona*
17 *Health Care Cost Containment System* ("AHCCCS", Sistema de contención de los costos de los servicios médicos
18 en Arizona), a fin de excluir la cobertura por los servicios/tratamientos de diálisis renal y para exigir que hubiera un
"desencadenamiento repentino" para la cobertura, violando la Ley Médica federal. Específicamente, el Demandado
Rodgers cambió las políticas del AHCCCS en el Manual de Proveedores y en la norma administrativa R9-22-217.
Por otra parte, los Demandantes alegaron que el Demandado Rodgers eliminó la facultad de los proveedores de
recibir la autorización previa para los servicios de diálisis renal. Finalmente, los Demandantes alegaron que el
Demandado Rodgers no cursó la debida notificación ni brindó la oportunidad de que se celebrase una audiencia
previa a la terminación de los servicios de diálisis renal, violando así lo dispuesto por el Artículo 1983 del Título 42
del Código de los Estados Unidos.

19 Los demandantes elevaron un recurso para obtener un mandato judicial preliminar y un recurso para una
certificación de clase. Se certificó una clase provisoria el 24 de septiembre de 2002, la cual se modificó el 7 de
octubre de 2002. La clase se definió de la siguiente manera:

20 La clase consistirá en todas las personas que sean o que serán elegibles para
21 los servicios médicos federales de emergencia, de conformidad con el
22 programa del Título XIX del AHCCCS, cuya enfermedad renal terminal cumpla
23 la definición de 'afección médica de emergencia', establecida en el Artículo
24 1396 b(v)(3) del Título 42 del Código de los Estados Unidos, y para quienes sus
25 médicos hubieran prescrito tratamientos ambulatorios de hemodiálisis al
26 menos tres veces por semana. La clase incluye a todos los individuos que, de
27 conformidad con el programa "servicios extendidos" contemplado en el Título
28 XIX del AHCCCS, hayan recibido diálisis en calidad de pacientes ambulatorios
antes del 1º de noviembre de 2001, y para quienes el tratamiento haya
continuado de conformidad con S.B. 1007.

29 En las órdenes judiciales asentadas el 17 de junio, el 24 de septiembre y el 7 de octubre de 2002, se
30 concedió un mandato judicial preliminar para la clase, el cual prohibía al Demandado Rodgers limitar el acceso a la
31 diálisis para los Demandantes y la clase provisoria y exigía al AHCCCS la cobertura del tratamiento de diálisis
32 ambulatorio que fuera médicamente necesario como un servicio médico de emergencia.

33 De conformidad con la orden judicial con fecha del 17 de junio de 2002, Tommy Thompson, Secretario del

1 Departamento de Salud y Servicios Sociales, fue sindicado como Demandado en esta acción, en una demanda
2 enmendada que se presentó el 16 de julio de 2002. Con posterioridad, el Secretario elevó un recurso para que lo
3 desestimase como Demandado, que se concedió el 26 de noviembre de 2002. El 16 de junio de 2004, este
4 Tribunal reestableció la condición de Demandado para Thompson, en calidad de demandado sindicado en esta
5 acción, a fin de garantizar que las disposiciones del mandato judicial preliminar fueran acatadas por el Demandado
6 Thompson.

7 Los Demandantes y el Demandado Rodgers llegaron a un acuerdo para resolver esta cuestión sin seguir
8 adelante con las actuaciones judiciales.

9 Las partes convinieron que al asentar el presente Decreto de consentimiento, las partes presentarán una
10 estipulación para desestimar al Demandado Michael Leavitt como sucesor del Demandado Tommy Thompson,
11 como Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales, en calidad de parte.

12 Las partes no han interpuesto objeciones a la competencia del Tribunal en esta causa y renuncian a su
13 derecho a una audiencia y al asentamiento de las decisiones sobre las cuestiones de hecho y las conclusiones
14 jurídicas.

15 El Tribunal, tras revisar los términos del Decreto de consentimiento, los alegatos obrantes en autos y todo
16 comentario proveniente de los miembros integrantes de la clase, resuelve cuanto se expone a continuación:

- 17 1. A los efectos del presente Decreto de consentimiento, la clase se define tal como se ha
18 certificado previamente, con fecha del 7 de octubre de 2002.
- 19 2. Esta conciliación es justa, razonable y adecuada.
- 20 3. Esta conciliación exige que el AHCCCS cubra la diálisis renal ambulatoria que revista un carácter
21 médicamente necesario, como un servicio médico de emergencia; que curse la debida
22 notificación; y que brinde la oportunidad de que se expongan las negativas del AHCCCS y la
23 terminación del servicio de cobertura para la diálisis renal ambulatoria para que puedan ser
24 escuchadas.
- 25 4. Las partes han provisto una notificación a la clase respecto de esta conciliación el día 3 de
26 Enero, 2007, y se ha celebrado una audiencia justa el día 26 de Febrero, 2007
- 27 5. Hubo ninguna objeción contra este decreto.

28 **POR LO TANTO, SE ORDENA, RESUELVE Y DECRETA:**

1. Que el presente Decreto de consentimiento resuelve todos los reclamos de los Demandantes y
de la clase contra el Demandado Rodgers, que surjan de este juicio.
2. Que el presente Decreto de consentimiento es definitivo y vinculante para las partes, sus
sucesores y cesionarios.

LAS ACCIONES DEL DEMANDADO RODGERS

3. Se prohíbe terminantemente y permanentemente al Demandado Rodgers, a sus funcionarios,
apoderados, empleados, sucesores y cesionarios, así como también, todas las personas en
activa participación con él, durante la vigencia del presente consentimiento, lo siguiente:
 - A. No cubrir el tratamiento de diálisis renal ambulatoria que se estime médicamente
necesario, como un servicio médico de emergencia, según Medicaid ("servicios médicos
de emergencia"), para las personas que tengan una enfermedad renal terminal.
Mediante este mandato judicial preventivo, el AHCCCS se retrotrae a las políticas
aplicadas con anterioridad a octubre de 2001.
 - B. No suministrar la autorización previa para la cobertura de los servicios de diálisis renal
ambulatoria y médicamente necesarios basados en un certificado médico mensual, que
establezca lo siguiente:

Soy el médico tratante de [nombre del miembro],
con un diagnóstico de enfermedad renal terminal
(ESRD, *end-stage renal disease*). A mi criterio, de no
implementarse los siguientes tratamientos de diálisis
por semana, sería de esperar razonablemente que la
ESRD del paciente derive en:

- un riesgo serio para la salud del paciente;
- un deterioro serio de la función corporal; o
- una disfunción seria de un órgano corporal o de parte de él.

En mi opinión como médico _____ requiere _____

tratamientos de diálisis por semana.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Firma

Fecha

- C. No proveer la debida notificación y no brindar una oportunidad para una audiencia pre-terminación, de conformidad con el Artículo 1396 (a) del Título 42 del Código de los Estados Unidos y con el Artículo 431.200 y subsiguientes del Título 42 del Código de los Estados Unidos, cuando el AHCCCS dé por terminada la cobertura de un tratamiento ambulatorio de diálisis renal como un servicio médico de emergencia para cualquier miembro integrante de la clase.
- D. No proveer la debida notificación y no brindar una oportunidad para una audiencia, de conformidad con el Artículo 1396 (a) del Título 42 del Código de los Estados Unidos y con el Artículo 431.200 y subsiguientes del Título 42 del Código de los Estados Unidos, sobre cualquier reclamo por servicios de diálisis renal ambulatoria que se hayan negado como un servicio médico de emergencia.
- 4. Para ejecutar las disposiciones antes descritas, el Demandado Rodgers llevará a la práctica las siguientes acciones:
 - (A) Dentro de los 60 días de asentado el presente Decreto, el Demandado habrá de modificar las secciones de los manuales de las políticas del AHCCCS, para declarar afirmativamente que los servicios de diálisis renal ambulatoria, que sean médicamente necesarios se proveen como un servicio médico de emergencia.
 - (B) Dentro de los 270 días de asentado el presente Decreto, el Demandado habrá de modificar la norma administrativa R9-22-217, para declarar afirmativamente que los servicios de diálisis renal ambulatoria y que médicamente necesarios se proveen como un servicio médico de emergencia.
 - (C) Dentro de los 30 días de asentado el presente Decreto, el Demandado publicará un aviso en el sitio web del AHCCCS respecto de los términos del presente Decreto de consentimiento, lo cual incluye información acerca del modo en que las personas pueden contactarse con el asesor letrado de los Demandantes, en caso de que tengan algún inconveniente para obtener el tratamiento de diálisis renal ambulatoria, que sea médicamente necesario, como un servicio médico de emergencia. Este aviso permanecerá en el sitio web mientras dure el presente decreto.
 - (D) Dentro de los 30 días de asentado el presente Decreto, el Demandado habrá de enviar una notificación a todos los Demandantes y a los miembros integrantes de la clase que actualmente estén recibiendo tratamiento de diálisis por una enfermedad renal terminal, en la que se incluirán los términos del presente Decreto de consentimiento y se les informará el modo en que los miembros integrantes de la clase pueden contactarse con el asesor letrado de los Demandantes, en caso de que tengan algún inconveniente para obtener el tratamiento de diálisis renal ambulatoria, que sea médicamente necesario.
 - (E) Dentro de los 30 días de asentado el presente Decreto, el Demandado habrá de enviar una notificación a todos los hospitales, clínicas de diálisis, nefrólogos y residentes, en la que se incluirán los términos del presente Decreto de consentimiento y se les informará de qué manera pueden contactarse con el asesor letrado de los Demandantes, en caso de que tengan algún inconveniente para obtener el tratamiento de diálisis renal ambulatoria, que sea médicamente necesario, para un cliente, como un servicio médico de emergencia.
 - (F) Dentro de los 60 días de asentado el presente Decreto, el Demandado enviará una notificación del presente Decreto de consentimiento e incluirá información sobre el modo en que las personas pueden contactarse con el asesor letrado de los Demandantes, si tienen dudas sobre el Decreto de consentimiento en la publicación trimestral "Claims Clue" [Datos sobre reclamos], distribuida entre todos los proveedores.
 - (G) Dentro de los 30 días de asentado el presente Decreto, el Demandado notificará a sus empleados y apoderados (incluso al personal del Departamento de Seguridad Económica de Arizona) acerca de los términos del presente Decreto de consentimiento y de las acciones obrantes en los párrafos (a) - (c) *ut supra*.
 - (H) El Demandado suministrará cada uno de los documentos identificados en los párrafos

(a) - (c) *ut supra* al asesor letrado de los Demandantes, para su revisión y aprobación dentro de un lapso de 45 días de asentado el presente decreto.

CAPACITACIÓN

5. El Demandado dictará cursos de capacitación para sus empleados y apoderados, incluso para el personal del Departamento de Seguridad Económica de Arizona, sobre los términos del presente Decreto de consentimiento, dentro de los 30 días de asentado el citado decreto. El personal a capacitar incluirá a los trabajadores de admisiones y elegibilidad, a los supervisores y al personal de revisión relevante.

PRESENTACIÓN DE INFORMES/CONTROL

6. Dentro de los 60 días de asentado el presente Decreto y, con posterioridad a esa fecha, cada cuatro (4) meses, el Demandado suministrará al asesor letrado de los Demandantes una declaración jurada del Demandado Rodgers, en la que indique que las acciones requeridas en el párrafo (4) del presente decreto siguen en plena vigencia.

HONORARIOS DE LOS ABOGADOS Y COSTAS JUDICIALES

7. El Demandado conviene en que el asesor letrado de los Demandantes tiene derecho a percibir sus honorarios profesionales y las cosas judiciales.
8. Dentro de los 30 días de asentado el presente Decreto, el asesor letrado de los Demandantes presentará un pedido de honorarios profesionales y cosas judiciales al Demandado Rodgers. Si las partes no logran llegar a un acuerdo respecto de la regulación de los honorarios profesionales y las cosas judiciales para los Demandantes, dichos Demandantes presentarán un pliego de costas y elevarán un recurso para la regulación de honorarios profesionales y costas judiciales, según emana de las Normas Locales 54.1 y 54.2. En respuesta al recurso interpuesto para la regulación de honorarios profesionales, el Demandado Rodgers no podría impugnar el derecho de los Demandantes a los honorarios profesionales y a las costas judiciales; sólo podrá accionar contra el importe solicitado. El plazo para que los Demandantes presenten el pliego de costas y eleven recurso para solicitar la regulación de honorarios profesionales se extenderá a 60 días después de que los Demandantes hayan presentado su pedido por escrito ante el Demandado Rodgers. Los Demandantes tendrán 30 días más para presentar su Memorándum avalando el recurso interpuesto para la regulación de honorarios profesionales y toda la documentación de respaldo.

LIMITACIONES

9. Ninguna de las disposiciones incluidas en este decreto violará ninguno de los derechos del solicitante a buscar una reparación judicial contra el Demandado, en el foro apropiado, por una presunta violación de la Ley de Medicaid que no se haya abordado en el presente decreto.

EJECUCIÓN

10. Las disposiciones del presente decreto se mantendrán en plena vigencia mientras este decreto conserve su validez, a menos que se produzca un cambio en el estatuto federal de Medicaid que afecte en forma directa el programa Federal de Servicios de Emergencia, de conformidad con el Título XIX. Si el Demandado estima que un cambio en el estatuto federal de Medicaid afecta directamente los términos del presente decreto, el Demandado enviará al asesor letrado de los Demandantes una notificación respecto de dicho cambio dentro de los 30 días de la fecha en que el Demandado tome conocimiento del cambio. La notificación tendrá que incluir lo siguiente:
- La modificación federal en la ley;
 - La fecha en la que el Demandado fue informado del cambio;
 - Los motivos que llevan al Demandado a creer que el cambio afecta los términos del decreto; y
 - Los fundamentos sobre los que descansan las conclusiones del Demandado detalladas en el párrafo c.
- Los Demandantes tendrán 30 días desde que reciben el aviso para informar al Demandado que los Demandantes están de acuerdo con la interpretación del Demandado o bien, para comunicarle que están en desacuerdo y que elevarán un recurso ante el tribunal para solicitar una intervención o interpretación judicial.
11. Al menos 30 días antes de elevar el recurso para la ejecución o desacato del presente Decreto de consentimiento, basándose en un reclamo de violación por parte del Demandado, los Demandantes enviarán una notificación por escrito al Demandado que explique la naturaleza y los pormenores de la violación que se alega, para brindar al Demandado la oportunidad de subsanar la/s presunta/s violación/es.

COMPETENCIA

- 1 12. El período de vigencia del presente decreto es de veinticuatro meses, desde la fecha en que el Decreto de consentimiento se presenta ante el tribunal.
- 2 13. El tribunal mantendrá su competencia en esta acción durante veinticuatro meses y cualquier período adicional que fuera necesario para la acción de ejecución y desacato iniciada antes de que venciera el período de veinticuatro meses durante el cual los Demandantes pueden solicitar a este Tribunal el cumplimiento del decreto.
- 3
- 4 14. Al finalizar el período de veinticuatro meses citado en el párrafo 13, si los Demandantes no han elevado un petitorio al tribunal para una modificación, ejecución o desacato, esta causa quedará sobreseída por dicho Tribunal.
- 5 15. El incumplimiento por parte del Demandado de implementar o ejecutar de otro modo los términos convenidos del presente decreto constituirá una violación de la orden de este Tribunal y será plenamente ejecutable por el mismo.
- 6 16. Las partes convienen en formalizar el presente Decreto de consentimiento, con sujeción a la aprobación por parte del Tribunal.
- 7

8 A LOS 16 días del mes de Marzo de 2007.

9

(firmado)

 Frank R. Zapata
 Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos

13 APROBADO Y ACORDADO POR:

14 EL CENTRO DE ARIZONA PARA LA LEY DE LOS DISCAPACITADOS

15 Por (firmado) _____
 16 Sally Hart
 100 North Stone Avenue, Suite 305
 Tucson, Arizona 85701

20 WILLIAM E. MORRIS INSTITUTE
 FOR JUSTICE

JOHNSTON LAW OFFICES PLC

22

23 Por (firmado) _____
 Ellen Sue Katz
 202 East McDowell, Suite 257
 Phoenix, Arizona 85004

23 Por (firmado) _____
 Logan Johnston
 One North 1st Street, Suite 250
 Phoenix, Arizona 85004

25 Abogados por los Demandantes

Abogado por el Demandado Rodgers